

De Kyoto (1997) a Copenhague (2009)
Justicia climática versus carbonocracia
Iñaki Bárcena

*“No sólo el clima esta en crisis,
las negociaciones sobre el clima también están en crisis”*
Martin Khor. *Third World Network*. Malasia

“El comercio del carbono es otra forma de redistribuir entre los ricos la riquezas comunes de los empobrecidos.” Médica activista de Los Ángeles. EE UU

El clima se está calentando. Esto no es relativo solamente a la atmósfera del globo terráqueo como corroboran los informes del IPCC¹, sino a las propias negociaciones diplomáticas sobre el cambio climático, a las reuniones institucionales y también a las movilizaciones en la calle. La primera Convención sobre el Clima se firmó en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra en 1992 y aunque el gobierno de los EE UU representado por G. Bush padre no la firmó, pues como manifestó expresivamente no estaba dispuesto a poner en cuestión el *“american way of life”*, la cumbre de Río de Janeiro sirvió para poner los primeros cimientos que llevaron al Protocolo de Kyoto en 1997, donde los 39 países más industrializados del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones de CO₂ entre el 6 y el 8% para el año 2012, respecto al CO₂ emitido por cada país en 1990. En Copenhague en Diciembre del 2009 se van a negociar que reducciones deberán producirse a partir del 2012, la manera en que afectarán a los diferentes países, con qué mecanismos de mitigación y adaptación y con qué modos de financiación. Tanto la Cumbre Río de Janeiro como la Conferencia Kyoto se vendieron al mundo como victorias del ecologismo. No ocurrió lo mismo con la Cumbre del Medio Ambiente de Johannesburgo en el 2002 que todo el mundo interpretó como un fracaso, ya que las Naciones Unidas tuvieron que reconocer que los gobiernos más importantes del mundo no estaban por la labor de invertir en el manido *desarrollo sostenible*.

Según algunos críticos no se podía pedir tanto al desarrollo sostenible. Que sea verde, justo, participativo, socialmente aceptable y que respete los derechos humanos... lo acabamos convirtiendo en una utopía, decían. Sin embargo, este debate no era nuevo.

¹ El IPCC- en castellano Panel Intergubernamental para el Cambio Climático- es una institución científica creada por la ONU para emitir informes sobre las perspectivas del cambio climático. En diciembre del 2006 en París emitieron su tercer informe en el que se confirmaba la raíz antropogénica de los cambios climáticos actuales.

En 1992, al finalizar la cumbre de Río de Janeiro, Greenpeace colocó una gran pancarta en el vistoso Pan de Azúcar en la que el planeta aparecía *sold out* (vendido). La demanda de responsabilizar a las corporaciones multinacionales de la crisis ambiental no se llevó a término y fueron los gobiernos occidentales, con la escandalosa ausencia de los EE UU de Norteamérica, los que se comprometieron a frenar el cambio climático y las emisiones de CO₂ si los países del Sur se comprometían a defender la biodiversidad. Ninguna mención expresa a las responsabilidades corporativas, entre otras cosas por el saber hacer de Maurice Strong, secretario de la Cumbre y fundador del Consejo de Negocios para el Desarrollo Sostenible (BCSD). En Kyoto se sellaron los compromisos a asumir por los gobiernos de los países industrializados (Anexo 1) y se abrió la puerta a la llamada carbonocracia. Según Larry Lohmann (Corner House), el gran error de Kyoto fue aceptar el esquema de la privatización de la atmósfera, según el cual los países y empresas más emisoras de gases de efecto invernadero -GEIs- obtuvieron sus permisos de emisión según las cantidades emitidas en 1990. En ese proceso hubo líderes políticos como Ravij Gandhi que reivindicaron que las cuotas de cada país fueran *per capita* pero este tipo de reivindicaciones igualitarias no fructificaron. Más tarde los *permisos* de emisión se transformaron en *derechos* de emisión y hoy se llega a hablar sin tapujos del derecho a contaminar por parte de Estados y empresas, y se recurre a la *mano invisible* del mercado del carbón para que a largo plazo nos libere del calentamiento global.

Los científicos del IPCC han advertido que los acuerdos de reducción de Kyoto son insuficientes y se necesitan reducciones drásticas para impedir que la temperatura del planeta aumente más de dos grados Celsius, proclama que hacía suya el G-8 el pasado mes de julio en L'Aquila (Italia). Sin embargo, ni los países del denominado Tercer Mundo están dispuestos a comprometerse en la solución de un problema creado por los países industrializados cuando estos se marcan compromisos a muy largo plazo (50 % en el 2050), ni el movimiento por la justicia climática está dispuesto a esperar que el mercado resuelva lo que no quiere resolver la voluntad política.

Contenidos y controversias de la conferencia de Copenhague.

Copenhague es la sexta y última cita que la ONU realizará este año 2009, tras las reuniones de Bonn, Nueva York, Bonn, Bangkok y Barcelona y se la denomina COP15 esto es, 15ª Conferencia de las Partes de la Convención del Cambio Climático. En la

capital danesa tratarán de buscar el consenso internacional para establecer los parámetros en los que se basará la nueva estrategia y los nuevos compromisos internacionales frente al cambio climático a partir del 2012. El esquema de discusión sigue los bloques del Plan de Acción negociado en el COP13 en Bali (Indonesia) en el 2007: Visión compartida, adaptación, mitigación, tecnología y financiación de las políticas contra el calentamiento global.

El problema central es que las visiones sobre las políticas a implementar son muy poco compartidas y cada sujeto negociador hace sus apuestas y valoraciones de forma contradictoria, como se recogen en el propio texto del preacuerdo de Copenhague. No será fácil lograr un acuerdo como en Kyoto.

Al igual que en ocasiones anteriores en otras cumbres medioambientales, la Unión Europea pretende ser el *líder verde* de esta conferencia y para ello aparece con su propuesta para que los países industrializados lleguen a reducir el 30% de sus emisiones de CO₂ para el 2020 sobre lo emitido en 1990. El objetivo para el año 2050 sería una reducción global total del 50% respecto a 1990. En cualquier caso si este acuerdo no se lograra, la Unión Europea se compromete a reducir el 20% para el 2020 y a utilizar un 20% de energías renovables en su *mix* o *tarta energética* para ese año.

El gobierno de Obama no es tan ambicioso. Tiene que hacer primero sus trabajos en casa y no lo tiene fácil. Este verano han aprobado una ley en el Congreso norteamericano, que todavía está parada en el Senado, por la que se comprometen a reducir sus emisiones un 17% para 2020; pero con relación a sus emisiones en el año 2005, lo que significa que sólo aspiran a reducir sus emisiones en un 4-5% con respecto a 1990. Obama parece estar más preocupado por organizar un mercado interno norteamericano de comercio de emisiones, al estilo europeo y poner los deberes a los países del Sur, como el freno de la deforestación basado en los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

Japón aparece claramente enfrentado las posturas del IPCC y no acepta que en el 2020 los países industrializados deban reducir sus emisiones de GEIs entre el 25 y el 40% respecto a 1990. Además advierte que sólo se ligará a un acuerdo internacional que este respaldado por EE UU, India y China.

Y llegamos a los mal llamados “países en vías de desarrollo” que ofrecen grandes diferencias en su seno. En general reivindican que este es un problema creado por los países industrializados y que son ellos quienes deben frenar sus emisiones. Empero, como advierten los medios de comunicación, China ha pasado a ser el primer emisor

actual de CO₂ a nivel mundial y ese es un dato de uso perverso. A países como China, India o Brasil se les asignará en Copenhague algún objetivo de reducción de emisiones pero no se espera lo mismo para los países africanos o caribeños. En cualquier caso y según el informe del Grupo de Mitigación del IPCC: *“los países en desarrollo (por ejemplo Brasil, China, India, México...) que han realizado esfuerzos por otros asuntos diferentes al cambio climático (desarrollo económico y alivio de la pobreza, seguridad energética y protección local del medio ambiente) redujeron el crecimiento de sus emisiones durante los últimos tres decenios en aproximadamente 500 millones de toneladas anuales. Esto representa más de las reducciones requeridas para los países del Anexo I (los industrializados) por el Protocolo de Kyoto.”* Lo cual demuestra que a pesar de no ser los responsables del calentamiento global, han hecho ya más aportaciones que los países industrializados. He ahí el dilema.

Es especialmente llamativo el caso de España, la séptima economía industrial más potente de mundo y la que más lejos se encuentra de cumplir los compromisos de Kyoto. Seguramente saldrá de Copenhague con unos límites de emisiones de GEIs menos restrictivos de los que tenía para el 2012, ya que según el Paquete de Energía y Cambio Climático aprobado por el Parlamento Europeo podrá llegar a emitir hasta el 30% más de lo que emitía en 1990, cuando con Kyoto el límite estaba en el 15%. Eso se debe a los distintos factores que se han tomado en cuenta a la hora de repartir las cuotas dentro de la Unión Europea. En opinión de Ecologistas en Acción, *“si el Estado español aspira a colaborar en el esfuerzo de reducir las emisiones globales a la mitad para el 2050 y caminar hacia modelos energéticos sostenibles y justos y menos dependientes de las energías fósiles debería asumir objetivos de emisiones muy por debajo de los descritos”*.

¿De dónde saldrá el dinero? Según las palabras del secretario de la COP15 en Copenhague, Yvo de Boer, *“Lo primero que necesitamos son objetivos claros y ambiciosos de reducción de emisiones a medio plazo e individuales para los países desarrollados. Lo segundo, claridad sobre qué harán los países en desarrollo para limitarlas. Tercero apoyo económico de los países industrializados para ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse a los impactos del cambio climático y cuarto y último claridad en como se va a gestionar todo esto”* (El País, 2/11/09). Lo que estas palabras transmiten es la existencia de una situación diplomática realmente complicada,

puesto que son muchos factores los que están en juego. Por ejemplo, todo lo referente a la financiación a medio plazo de las políticas para frenar el cambio climático. Existen distintos cálculos, pero instituciones y organizaciones ecologistas cifran en alrededor de 100.000 millones de euros anuales, la cantidad de dinero necesaria a partir del 2020 para que los países empobrecidos se adapten y mitiguen el calentamiento global. Mucho dinero, que debería salir de las arcas de los países enriquecidos y de sus empresas transnacionales que son los máximos responsables del cambio climático. La posición oficial de la Unión Europea es que en una situación de crisis como la actual los acuerdos de Copenhague deben alcanzarse de una forma *rentable* (sic). La UE considera que un mercado de carbono mundial y efectivo puede reducir considerablemente los costes en los países ricos y en los empobrecidos y espera que con los bonos negociados en los mercados del carbono se pueda obtener un tercio del capital para las inversiones necesarias en los países del Sur.

Y así, como describe Brian Tokar en su artículo *“Toward Climate Justice. Can we turn back from the abyss?”* (Z Magazine, 2009), los representantes de las corporaciones transnacionales planean como buitres en las reuniones sobre el clima de la ONU, buscando definir los términos en los que esperan que se cree rápidamente un mercado expansivo de permisos emisiones de CO₂ comercializables. A su vez, el Banco Mundial esta presionando por controlar los fondos para cortar la deforestación, responsable de más de una cuarta parte del actual calentamiento global. Según Silvia Ribeiro (“Cerdos climáticos”. *Sin Permiso*, 11/9/09) *“una de las peores trampas que acompañaron el establecimiento de Kyoto es que los gobiernos aceptaron que en lugar de reducir efectivamente las emisiones de GEIs en fuente, los países del Norte y empresas que más los producen pueden pagar a otros (que manejan menos emisiones) para seguir contaminando, sea a través de fondos manejados por gobiernos, o a través de mercados privados de carbono. Esto no mejora el cambio climático pero ha dado lugar a nuevas fuentes de negocios y especulación financiera con mercados primarios y secundarios de bonos de carbono. Peor aún, los llamados sumideros de carbono, con los que las empresas compran su derecho a contaminar, son pingües negocios para las mismas u otras grandes transnacionales, como es el caso de las extensas plantaciones de monocultivos de árboles, con enormes impactos ambientales y sociales”*.

Muchas son las críticas que en el último lustro se han vertido contra los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y los mercados de carbono que, puesto que no generan reducciones de emisiones, retrasan las transformaciones hacia economías

post-carbón y la financiación de hacia cambios tecnológicos que busquen la sostenibilidad socio-ambiental. Su *leit motiv* es la rentabilidad y por lo tanto deberían ser regulados de tal manera que los MDL se basaran en tomas de decisión participativas de las comunidades afectadas, que produzcan reducciones efectivas y probadas de emisiones y satisfagan las necesidades energéticas con tecnologías renovables y de eficiencia. Respecto a los mercados de carbono, según Ecologistas en Acción debería rechazarse la comercialización de bonos que corran el riesgo de no ser permanentes, de estar regulados por otra legislación diferente que la de Kyoto, o que causen daños ambientales mayores, como es el caso de la energía nuclear, la eliminación por incineración de fluorados (HFCs), las grandes instalaciones hidroeléctricas, los negocios ligados a la forestación y deforestación y la captura y almacenamiento geológico de CO₂. (ver “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, *El Ecologista* n° 60, Primavera 2009)

Especial importancia tiene la propuesta mancomunada del Banco Mundial y de la ONU conocida con el nombre de REDD (Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación de los Bosques en Países en Desarrollo). La deforestación y el cambio de usos del suelo son una causa importante del calentamiento global (18-20%) sin embargo la forma de frenar este fenómeno no está consensuada. Mientras para el Banco Mundial se debe operar a través del comercio de créditos de carbono, las principales controversias surgen a la hora de evaluar los efectos que los proyectos de reforestación o de evitación de la deforestación tienen sobre las poblaciones indígenas y las comunidades locales, que generalmente son apartadas de las negociaciones.

En este sentido la posición de Ecologistas en Acción es clara: Mecanismos como el denominado REDD no deben servir en ningún caso para compensar las emisiones en otros lugares o países; el posible acuerdo de la ONU en esta materia debe reconocer expresamente los derechos de los pueblos indígenas y no se debe dejar el futuro de los bosque en manos del mercado.

El movimiento por la justicia climática. También la calle se está calentando. Desde el Foro Social Mundial de Belem do Pará en Brasil en Enero del 2009 se hizo un llamamiento para la movilización global y presionar en la Cumbre de Copenhague en Diciembre para obtener un acuerdo que responda a las demandas de la justicia climática y no a los intereses de la carbonocracia. Los eventos y las movilizaciones no se han hecho esperar. Quizás la iniciativa más conocida sea la de la Red de Acción por la Justicia Climática que ha hecho un llamamiento a acudir a la capital de Dinamarca (7-18

Diciembre, 2009) tratando de paralizar durante un día la conferencia de ministros, como sucedió en Seattle diez años atrás, y transformarla de forma no-violenta en una Cumbre Popular para la Justicia Climática. No está en su ánimo hacer que la Conferencia de Copenhague se suspenda, sino demostrar en un día de acción global que el mercado no puede seguir regulando la vida de la gente y que para conseguir la justicia ambiental no sirven las tecnologías insanas, no comprobadas e insostenibles.

Copenhague va a ser un punto crucial en la agenda para el cambio climático ya que miles de activistas y organizaciones de todo el mundo están dispuestos a movilizarse para que no sean las transnacionales del carbón y del petróleo, de la energía, de los *agrobusiness*, de los automóviles y de las finanzas quienes presionen a puerta cerrada sobre los gobiernos.

Son múltiples y variadas las iniciativas de movilización popular para la justicia climática que se han producido en los cinco continentes. En Sudáfrica, donde en 2004 organizaciones de todo el mundo redactaron la Declaración de Durban sobre el Comercio del Carbón, no han remitido desde entonces las campañas de justicia climática y en octubre se reunió en Ciudad del Cabo, tras haber recorrido 15 países africanos, un tribunal internacional presidido por Desmond Tutu, que dentro de la campaña Tiempo para la Justicia Climática ha tratado de reunir voces, denuncias y testimonios que estarán presentes en Copenhague. También lo estarán las organizaciones de Europa y Latinoamérica (Enlazando Alternativas) que organizaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cochabamba un Tribunal Internacional de Justicia Climática a mediados de Octubre, donde plantearon que “ *el cambio climático es el mayor problema socio-ambiental al que se enfrenta la humanidad, en la medida en que agudizará otros problemas como la pobreza, el hambre, la guerra, las desigualdades de género, la soberanía alimentaria, el acceso al agua y saneamiento...*” Estos Tribunales a pesar de no tener carácter estatal vinculante, responden a la necesidad de dar respuesta a la ausencia de mecanismos e instituciones que sancionen los crímenes climáticos.

Otra interesante campaña que mira a Copenhague es la denominada *Don't nuke the climate* (No nuclearizar el clima) que reúne a 235 organizaciones en 32 países y que tratan de contrarrestar la renaciente amenaza de reactivar la energía nuclear con el supuesto objeto de frenar el cambio climático. Son muchos los argumentos de esta campaña, entre otros que las centrales nucleares son muy caras y antiproductivas, generan más CO₂ que otras fuentes energéticas (ver Bárcena, Lago y Villalba (2009),

Energía y Deuda Ecológica. Transnacionales, cambio climático y alternativas, Barcelona: Icaria) y tan solo podrían reducir 6% de las emisiones de CO₂ mientras las renovables podrían reducir un 21% y el ahorro energético hasta el 51%. Cada euro invertido en la eficiencia energética y las energías renovables se ha demostrado hasta once veces más efectivo para evitar el efecto invernadero que las nucleares, según un informe del 2008 emitido por el Rocky Mountain Institute norteamericano. Esta campaña también ha fijado sus objetivos en presionar en Copenhague para que al igual que en el Protocolo de Kyoto, la energía nuclear no sea tenida en cuenta como fuente energética susceptible de ser usada y contabilizada para frenar el cambio climático. Y ya parece estar consiguiendo algunos frutos. La pro-nuclear Agencia Internacional de la Energía, organismo de la OCDE, presentó en octubre un informe extraordinario que mira a Copenhague y en el que apuesta por las energías limpias pidiendo una inversión en fuentes de energías alternativas cuatro veces superiores al gasto nuclear de aquí al 2030 y para que las renovables superen a la producción eléctrica de origen nuclear en sólo 10 años.

En cualquier caso también existen organizaciones ecologistas como las norteamericanas *Environmental Defense Fund* o *Nature Conservancy* que ha jugado un papel relevante en la elaboración de las nuevas propuestas del gobierno Obama, en colaboración con Alcoa, BP, Dow, DuPont, General Electric, Ford, General Motors y otras compañías. Juntos aspiran a regular las políticas del cambio climático con compromisos a largo plazo, basados en el la libre distribución en un principio de permisos de emisión comercializables que permitan a estas transnacionales diferir hacia el futuro sus reducciones en las emisiones de GEIs. Es mejor que nada dicen, sin embargo han recibido fuertes críticas de grupos como Amigos de la Tierra, *Public Citizen* o Greenpeace.

Las contradicciones y las diferencias están servidas, tanto en el seno del ecologismo, como entre los gobiernos como se demostró el pasado octubre en Bangkok y Cochabamba. Mientras en la reunión preparatoria de la COP15 en Tailandia mayoritariamente se apostaba por políticas de mercado para intercambiar los nuevos permisos de emisión y se apostaba por la *carbonocracia*, gobernada por las corporaciones multinacionales y los gobiernos del Norte, en Cochabamba, gobiernos latinoamericanos del ALBA, amparados las peticiones de los Tribunales por la Justicia Climática, exigían la reducción drástica de emisiones y el reconocimiento internacional de la deuda histórica del carbono de las transnacionales y de los países industrializados.

Ese escenario es el que se va a representar en Copenhague y el conflicto climático está servido. El juego diplomático y las movilizaciones están en marcha pero lo más importante, salga lo que salga y reflejen lo que reflejen de los nuevos textos y acuerdos de las Naciones Unidas, incluso en el caso de que no haya ningún acuerdo global, la garantía para que triunfe la justicia climática frente a la *carbonocracia* es que el movimiento por las sociedades y ciudades post-carbón, las redes de ciudades en transición que advierten de los riesgos del *peak oil* sigan creciendo y, a nivel local, regional y global, surjan alternativas populares que reclamen de sus gobiernos compromisos para reducir las emisiones de CO₂.

Iñaki Bárcena Hinojal es profesor e investigador de la Universidad del País Vasco y miembro de Ekologistak Martxan.

[Este artículo se publicará en el nº 107 de VIENTO SUR. Ha sido escrito antes de la Cumbre y con el objetivo de servir de introducción a los debates que allí se producirán. Como la distribución de la revista va a retrasarse respecto a lo previsto, hasta primeros de enero, hemos decidido difundir anticipadamente el texto por medio de nuestra web www.vientosur.info].